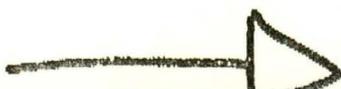


plaza pública para la edición del 30 de noviembre de 1994
Balance: intolerancia, inseguridad
miguel ángel granados chapa

Dos heridas profundas en el cuerpo social, que tardan en sanar y dejan cicatriz permanente, se ahondaron en el sexenio que concluye esta medianoche. La incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana y la intolerancia política fueron elementos constitutivos, no aledaños, del programa y el hacer del equipo del Presidente Salinas.

Algo dice que haya habido cuatro personas a cargo de la Procuraduría General de la República, y que allí estallara el postrer conflicto, de alto rango por añadidura, en la presente administración. Ninguno de los titulares pudo encarar con éxito el doble problema de 1) la delincuencia organizada creciente que 2) tiene dentro de la Procuraduría misma algunos de sus principales contactos y jefes. El auge del narcotráfico, iniciado en el sexenio anterior, no reconoció ya límites en la administración que agoniza. Su capacidad de fuego y de corrupción permitió a esa mafia señorearse en varias regiones y ciudades. Se nos ha dicho de logros en el combate a las drogas y en el desmantelamiento de bandas, pero no disminuye la cuantía del negocio ni la peligrosidad de sus operadores, quizá por que el ataque y el exterminio se realizan con criterios selectivos y de competencia comercial.

El hecho es que de los ajustes de cuentas internos los sicarios del narcotráfico dirigieron sus armas a zonas sociales diversas de la suya. El informe oficial sobre la muerte del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo explicó que armas asociadas a ese ruin negocio le segaron la vida, y el subprocurador general Mario Ruiz Massieu dijo que en el



- 2 -

homicidio de su hermano José Francisco, motivado por la política, no era excluible la presencia del narcotráfico. Tampoco lo es por entero en el asesinato de Luis Donald Colosio. Si bien subsiste la tesis oficial del asesino único, ingredientes próximos al caso (como la eliminación posterior del jefe policiaco municipal Federico Benítez) y hasta el hecho de que el atentado ocurriera en Tijuana, meca de una de las bandas principales, permiten no desestimar todavía la vinculación del crimen con las narcomafias. Estas, en fin, se han convertido en una presencia ubicua. Saltan por doquier, y el tufo de su contaminación no se percibe sólo en las zonas bajas de la sociedad y el gobierno.

Un género distinto de delincuencia que ha prosperado en este sexenio es la que secuestra a personas. Parecemos olvidar que sigue en manos de sus captores el señor Losada, del Grupo Gigante, y que a diario en algún punto de la geografía mexicana alguien es llevado por la fuerza, para obtener dinero por su rescate. Sólo en Michoacán, han sumado cerca de tres mil las personas desaparecidas en esas condiciones, en el último quinquenio, y tasas semejantes se padecen en no pocas entidades. Y ni qué decir de los delitos patrimoniales, especialmente en las grandes ciudades, donde los asaltos callejeros y en las casas se multiplican, al paso en que crece la impunidad.

En lo que hace al respeto de los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, el saldo es tan negativo como lo es el crimen político. Cerca de trescientas personas murieron en estos años, asesinadas por motivos políticos, especialmente vinculados con elecciones que, a pesar de todo, siguen siendo un motivo de discordia civil y no de

— 3 —

acuerdo ciudadano. Allí se asienta, entonces, uno de los saldos rojos del sexenio salinista, que hizo una política autoritaria y deficiente, no sólo respecto de la oposición sino también contra sus propios partidarios.

El manejo de las Cámaras, especialmente durante las sesiones de 1993 de la anterior legislatura, mostró los excesos a que puede llegar un presidencialismo que desdeña el derecho. La profusión de interinatos en los gobiernos estatales, que no correspondió con el interés general, enseñó la precariedad de los poderes locales frente al avasallamiento federal. A veces, valores más altos como la preservación de la paz social aconsejaron las remociones de gobernadores, pero en la mayor parte de los casos se trató de resolver mediante ese expediente arbitrario, complicaciones internas en la vida del partido gubernamental.

Los sacudimientos en la cúpula de la clase política gobernante, con que está culminando entre verguenzas este sexenio, no son anómalos, sino consecuencia no sólo de la defensa de intereses particulares, sino del manejo desaprensivo de las normas y de la inexperiencia en el conocimiento de las personas.

La política tendría en todo tiempo que estar vinculada con la vida, porque es uno de los instrumentos para crear las condiciones que la hacen posible. Nada corrompe tanto a la política, entonces, como su conexión con la muerte. Ese negro vínculo permanecerá como la más pesada herencia de un sexenio a otro. Los cadáveres de Colosio y Ruiz Massieu, así como los de los perredistas asesinados en años anteriores y este, y aun los de los militantes tabasqueños fallecidos en un accidente de carretera mientras participan en una protesta

→

— 4 —

electoral, serán un permanente recordatorio de nuestra vuelta atrás. Se diría que la descardenización emprendida por este gobierno, es decir la supresión de la presencia y la huella de los Cárdenas, padre e hijo, alcanzó límites lejanos. No sólo se dejaron de emitir los billetes que ostentaban la efigie de don Lázaro y Cuauhtémoc, sino que se ha suprimido en la práctica el principal legado del primer Cárdenas a la política mexicana. Antes de su presidencia, el crimen era una solución o instrumento de la política. Hemos retornado a esa época preterita.

— 0 —

PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Balance: intolerancia, inseguridad

El manejo de las Cámaras, especialmente durante las sesiones de 1993 de la anterior Legislatura, mostró los excesos a que puede llegar un presidencialismo que desdeña el derecho. La profusión de interinatos en los gobiernos estatales, que no correspondió con el interés general, enseñó la precariedad de los poderes locales frente al avasallamiento federal.



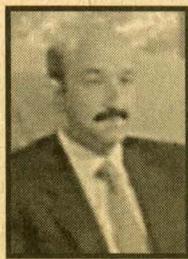
Dos heridas profundas en el cuerpo social, que tardan en sanar y dejan cicatriz permanente, se ahondaron en el sexenio que concluye esta medianoche. La incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana y la intolerancia política fueron elementos constitutivos, no aledaños, del programa y el hacer del equipo del presidente Salinas.

Algo dice que haya habido cinco personas a cargo de la Procuraduría General de la República, y que allí estallara el postrer conflicto, de alto rango por añadidura, en la presente administración. Ninguno de los titulares pudo encarar con éxito el doble problema de 1) la delincuencia organizada creciente que 2) tiene dentro de la Procuraduría misma algunos de sus principales contactos y jefes. El auge del narcotráfico, iniciado en el sexenio anterior, no reconoció ya límites en la administración que agoniza. Su capacidad de fuego y de corrupción permitió a esa mafia señorearse en varias regiones y ciudades. Se nos ha dicho de logros en el combate a las drogas y en el desmantelamiento de bandas, pero no disminuye la cuantía del negocio ni la peligrosidad de sus operadores, quizá porque el ataque y el exterminio se realizan con criterios selectivos y de competencia comercial.

El hecho es que de los ajustes de cuentas internos los sicarios del narcotráfico dirigieron sus armas a zonas sociales diversas de la suya. El informe oficial sobre la muerte del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo explicó que armas asociadas a ese ruin negocio le segaron la vida, y el subprocurador general Mario Ruíz Massieu dijo que en el homicidio de su hermano José Francisco, motivado por la política, no era excluible la presencia del narcotráfico. Tampoco lo es por entero en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Si bien subsiste la tesis oficial del asesino único, ingredientes

próximos al caso (como la eliminación posterior del jefe policiaco municipal Federico Benítez) y hasta el hecho de que el atentado ocurriera en Tijuana, meca de una de las bandas principales, permiten no desestimar todavía la vinculación del crimen con las narcomafias. Estas, en fin, se han convertido en una presencia ubicua. Saltan por doquier, y el tufo de su contaminación no se percibe sólo en las zonas bajas de la sociedad y el gobierno.

Un género distinto de delincuencia que ha prosperado en este sexenio es la que secuestra a personas. Parecemos olvidar que a diario en algún punto de la geografía mexicana alguien es llevado por la fuerza, para obtener dinero por su rescate. Sólo en Michoacán, han sumado cerca de tres mil las personas desaparecidas en esas condiciones, en el último quinquenio, y tasas semejantes se padecen en no pocas entidades. Y ni qué decir de los delitos patrimoniales, especialmente en las grandes ciudades, donde los asaltos callejeros y en las casas se multiplican, al paso en que crece la impunidad.



La incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana y la intolerancia política fueron elemen-

tos constitutivos, no aledaños, del programa y el hacer del equipo del presidente Salinas.

En lo que hace al respeto de los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, el saldo es tan negativo como lo es el crimen político. Cerca de trescientas personas murieron en estos años, asesinadas por motivos políticos, especialmente vinculados con elecciones que, a pesar de todo, siguen siendo un motivo de discordia civil y no de acuerdo ciudadano. Allí se asienta, entonces, uno de los saldos rojos del sexenio salinista, que hizo una política autoritaria y deficiente, no sólo respecto de la oposición sino también contra sus propios partidarios.

El manejo de las Cámaras, especialmente durante las sesiones de 1993 de la anterior Legislatura, mostró los excesos a que puede llegar un presidencialismo que desdeña el derecho. La profusión de interinatos en los gobiernos estatales, que no correspondió con el interés general, enseñó la precariedad de los poderes locales frente al avasallamiento federal. A veces, valores más altos como la preservación de la paz social aconsejaron las remociones de gobernadores, pero en la mayor parte de los casos se trató de resolver mediante ese expediente arbitrario, complicaciones internas en la vida del partido gubernamental.

Los sacudimientos en la cúpula de la clase política gobernante, con que está culminando entre vergüenzas este sexenio, no son anómalos, sino consecuencia no sólo de la defensa de intereses particulares, sino del manejo desaprensivo de las normas y de la inexperiencia en el conocimiento de las personas.

La política tendría en todo tiempo que estar vinculada con la vida, porque es uno de los instrumentos para crear las condiciones que la hacen posible. Nada corrompe tanto a la política, entonces, como su conexión con la muerte. Ese negro vínculo permanecerá como la más pesada herencia de un sexenio a otro. Los cadáveres de Colosio y Ruíz Massieu, así como los de los perredistas asesinados en años anteriores y éste, y aun los de los militantes tabasqueños fallecidos en un accidente de carretera mientras participan en una protesta electoral, serán un permanente recordatorio de nuestra vuelta atrás. Se diría que la descardenización emprendida por este gobierno, es decir la supresión de la presencia y la huella de los Cárdenas, padre e hijo, alcanzó límites lejanos. No sólo se dejaron de emitir los billetes que ostentaban la efigie de don Lázaro y Cuauhtémoc, sino que se ha suprimido en la práctica el principal legado del primer Cárdenas a la política mexicana. Antes de su Presidencia, el crimen era una solución o instrumento de la política. Hemos retornado a esa época pretérita.